



JOSE ORLANDO BETANCOURT GARZON

ABOGADO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

CARRERA 19 B NO 15 A - 5 BARRIO LA INMACULADA

TRUJILLO VALLE

TL 300-781-41-42

Señores:

Juzgados Administrativos del Circuito de Guadalajara de Buga Valle (Reparto)

REFERENCIA: **Acción de Reparación Directa.**

Demandantes: **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO TOMAS ADRIAN VILLOTA QUITIAN, JOSE ALONSO VILLOTA SERNA, y BLANCA MARLIRIA PALACIO BOLIVAR.**

Demandados: **LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.**

JOSE ORLANDO BETANCOURT GARZON, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado judicial de los señores **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO** victima directa del perjuicio, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo **TOMAS ADRIAN VILLOTA QUITIAN**, de otro lado, **JOSE ALONSO VILLOTA SERNA**, y **BLANCA MARLIRIA PALACIO BOLIVAR**, padres de la víctima directa del perjuicio, identificados con las cédulas **1.116.234.858, 6.427.722 y 66.712.829** expedidas en Tuluá (V) respectivamente, por medio del presente escrito acudimos ante su Despacho para presentar **ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA**, contemplada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra **LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL- DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALIA GENERAL DE LA NACION**; Entidades representadas legalmente así: Por el Doctor **JUAN MANUEL SANTOS**, por su Directora ejecutiva, Doctora, **FELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ** o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda y por el Doctor **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ**, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de este medio de control, todos mayores y con domicilio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, para que previos los trámites del proceso ordinario y surtido con citación y audiencia del Procurador Judicial, para que en sentencia de mérito que haga tránsito a cosa juzgada se pronuncien las pretensiones que adelante formularé.

PARTES PROCESALES y CALIDAD EN QUE ACTUAN.

DEMANDANTES: JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO victima directa del perjuicio, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo **TOMAS ADRIAN VILLOTA QUITIAN**, de otro lado, **JOSE ALONSO VILLOTA SERNA**, y **BLANCA MARLIRIA PALACIO BOLIVAR**, padres de la víctima.

DEMANDADOS: LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL, representada legalmente por la Doctora **FELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ**, o por quien haga sus veces.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION, representada legalmente por el doctor **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ**, o por quien haga sus veces.

PARTES INTERVINIENTES:

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Procurador Judicial ante esa Honorable Corporación.

I. DECLARACIONES Y CONDENAS

1.1.-Se declare que la **NACIÓN–RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, son solidaros y responsables administrativamente de los daños y perjuicios causados a mis poderdantes **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO, TOMAS ADRIAN VILLOTA QUITIAN, JOSE ALONSO VILLOTA SERNA, y BLANCA MARLIRIA PALACIO BOLIVAR**, con ocasión de la detención injusta que sufriera el señor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, en la cárcel del circuito de Tuluá valle, desde el día doce (12) de julio hasta el primero (1) de diciembre de 2016, fecha en que el juzgado tercero penal del circuito de esta ciudad lo **ABSOLVIERA** de los **injustos cargos formulados en su contra**, a petición de la Fiscalía General de la Nación y recobrara su libertad inmediata. Las otras personas concurren en calidad de hijo y padres de la víctima directa de la detención injusta.

1.2- Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades demandadas a pagar a los demandantes los perjuicios materiales (**daño emergente y lucro cesante**) e inmateriales (perjuicios morales), estimados como mínimo en la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO TREINTA y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENE (\$148.133.910)**, los cuales discriminaré en el siguiente acápite.

1.3- La **NACIÓN–RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACION** darán cumplimiento a la sentencia y actualizarán la condena respectiva de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 195 del **C.P.A.C.A**, hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

II. DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS ACCIONANTES.

2.1. LOS PERJUICIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

Los perjuicios se ocasionaron como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima directa el señor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, desde el día doce (12) de julio hasta el primero (1) de diciembre de 2016, es decir, un total de **144** días.

2.1.1. DAÑO EMERGENTE

No se solicitará condena alguna por este concepto.

2.1.2. LUCRO CESANTE

El Lucro Cesante está constituido por el dinero que mi representado dejó de percibir durante todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, es decir, desde el día doce (12) de julio hasta el primero (1) de diciembre de 2016, fecha en que el juzgado tercero penal del circuito de esta ciudad lo **ABSOLVIERA** de los **injustos cargos formulados en su contra**, a petición de la Fiscalía General de la Nación y recobrara su libertad inmediata.

Para **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, quien al momento de su injusta detención derivaba ingresos por concepto de su trabajo, así:

El salario mínimo legal mensual para la fecha de la privación de la libertad, es decir, para el 2014 equivalía a **\$616.000**, más el 30% por concepto de prestaciones sociales es decir, **\$170.010** suman un total mensual de **\$736.710**, lo que equivale a un salario diario de **\$24.557** y como durante ese año estuvo **144** días privada de su libertad esto nos da un total de **\$3.537.648**.

LAPSO PARA BUSCAR TRABAJO.

Se deberá estimar igualmente que en este caso en concreto se disminuyó totalmente la expectativa laboral y económica del demandante, por cuanto con un señalamiento tan grave como el que le hicieron, no pudo emplearse por un largo periodo de tiempo, además su prestigio adquirido durante largos años de trabajo fue mancillado y destruido a consecuencia del hecho antijurídico dañino, es decir, su good will o buen nombre quedo seriamente cuestionado, por consiguiente acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala del Honorable Consejo de Estado se ha valido de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses), para un total de **\$6.705.562** como indemnización por dicho concepto..

8.75 meses x 30= 262.5 días.
262.5 x \$ 25.545= \$ **6.705.562**.

La anterior indemnización contempla dos partes: la debida o consolidada y la futura o anticipada, para la cual se deberá aplicar las fórmulas que para tal efecto han venido aplicando tanto los Tribunales, jueces y el Consejo de Estado, previa actualización de los ingresos.

2.2. PERJUICIOS MORALES

Como se sabe, los perjuicios morales son objetivados y subjetivados. Los primeros son todos los daños resultantes de las manifestaciones económicas a causa de las angustias o trastornos psíquicos que sufrió mi representado víctima directa del perjuicio y su grupo familiar, como consecuencia de tener que soportar un daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad durante un lapso de tiempo que duró **144** días y la incertidumbre de estar privado del segundo derecho fundamental por excelencia como es la libertad, pues se mantuvo esta familia durante un estado de zozobra durante el tiempo que duro la detención, con las implicaciones y consecuencia de todo orden que ello representa.

Los impactos sentimentales y afectivos también alcanzaron el plano externo o de la productividad, porque a pesar de que señor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, fue absuelto sigue viviendo el rechazo de gran parte de la comunidad, lo que le ha traído dificultades para reiniciar su actividad laboral. Esos daños morales objetivados no solo los sufre la víctima directa del perjuicio, sino también sus parientes cercanos como sus padres e hijo.

En cuanto a los segundos o perjuicios morales subjetivados, son los perjuicios que exclusivamente lesionan los aspectos sentimentales, que originan angustias, dolores internos, psíquicos, es el dolor o angustia que se siente y que por ser tan difícil de definir se ha dado por llamar pretiumdoloris o precio del dolor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO** y su grupo familiar sufrieron ese precio del dolor de manera profunda durante el tiempo que este estuvo injustamente privado de su libertad, se causó angustia a su hijo y padres ya que sufrieron el dolor de verlo tras las rejas, estigmatizado por la sociedad y tuvieron que trabajar duro para sostener el hogar y la manutención de sus familia,

Teniendo en cuenta el tiempo de detención que tuvo que **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO** de **144** días, se estima los daños morales por ellos sufridos de la siguiente manera:

Para la víctima directa del perjuicio **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

Para su hijo **TOMAS ADRIAN VILLOTA QUITIAN**, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

Para su padre **JOSE ALONSO VILLOTA SERNA**, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

Para su madre **BLANCA MARLIRIA PALACIO BOLIVAR**, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes.

3. **LOS PERJUICIOS SE SINTETIZAN ASÍ:**

3.1. **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO.**

Perjuicios materiales:

Daño emergente de \$ 0

Lucro cesante: \$ 10.243.210.

Perjuicios morales: 50 SMLM = \$ 30.800.000.

Total perjuicios para: **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO: \$ 41.043.210.**

3.2. Para **TOMAS ADRIAN VILLOTA QUITIAN.**

Perjuicios morales: 50 SMLM = \$ 30.800.000.

3.3. Para **JOSE ALONSO VILLOTA SERNA** 50 SMLM = \$ 30.800.000

3.4. Para **BLANCA MARLIRIA PALACIO B** 50 SMLM = \$ 30.800.000

3.5. TOTAL PRETENSIONES:

En total las pretensiones al momento de presentar demanda las estimo en la suma de ciento treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos diez pesos moneda legal y corriente **(\$133.443.210)**.

III. HECHOS Y OMISIONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA.

- **PRIMERO:** el día doce (12) de julio de dos mil catorce (2014), mi poderdante señor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, se encontraba en el inmueble ubicado en la carrera 26 número 20-57 del Barrio Tomas Uribe de Tuluá (V), en compañía de un amigo de nombre **MARIO ANDRES LONDOÑO**, consumiendo estupefacientes, en ese instante la vivienda fue objeto de una orden de registro y allanamiento ordenada por la fiscalía 15 seccional en turno de **URI** de esta localidad y ejecutada por miembros de la policía nacional, por cuanto según el informe policivo se tenía conocimiento que en ese sitio se almacenaba estupefacientes y se expendía, una vez realizaron el registro encontraron dentro de la casa de habitación los siguiente elementos: Un bolsa plástica de color negra, en cuyo interior se encontraron 165 cigarrillos en forma cilíndrica, los cuales contenían marihuana, 86 envolturas en papel cuaderno las cuales contenían bazuco, 7 bolsas plásticas transparentes con marihuana, 46 tacos en forma cilíndrica que contenían marihuana, 17 bolsas plásticas que contenían clorhidrato de cocaína, 50 emboltura que contenían marihuana, un bloque pesado que contenía marihuana, obteniendo como resultado del pesaje de la droga incautada en el inmueble el siguiente: 1050 gramos de marihuana y 3 gramos de derivado de cocaína, como consecuencia de este operativo se capturo a mi defendido, quien se encontraba a en el sitio de los hechos al momento del allanamiento y registro.

- **SEGUNDO:** De acuerdo a estos hechos a mi poderdante se le imputó ante el juez cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de Tuluá valle, el delito de **TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, previsto en el canon 376 de la ley 599 de 2000. y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, a petición de la fiscalía 15 seccional de Tuluá.

- **TERCERO:** El escrito de acusación fue debida y oportunamente radicado ante el centro de servicios de esta urbe y le correspondió el conocimiento al juzgado tercero penal del circuito de la ciudad de Tuluá valle, quien adelanto la acusación y la preparatoria, finalmente para el día primero de diciembre de 2014, dio inicio a la audiencia de juicio oral y público y una vez agotada toda la actividad probatoria la fiscalía general de la nación solicito **SENTENCIA ABSOLUTORIA** en favor de los acusados, por cuanto se logró probar que ellos no tenían ninguna

relación directa con el inmueble allanado es decir, no tenían el dominio del mismo, y solo eran avezados consumidores, drogadictos, además se probó con los testimonios de los policiales que realizaron el operativo que el sitio era utilizado solo para el consumo de esta sustancia y que ellos estaban solo de paso allí consumiendo el alucinógeno.

- **CUARTO:** Seguidamente el juez tercero penal del circuito acogiendo el pedimento tanto de la defensa como de la fiscalía procedió a proferir la sentencia **ABSOLUTORIA** 103 de fecha primero (1) de diciembre de 2014, en favor de los acusados. declarando, que son avezados consumidores de sustancias y que se probó en el curso del proceso que han estado reclusos en centros de rehabilitación para personas con dependencia a esta clase de alucinógenos, porque son enfermos adictos y por ello se considera viable la postura del delegado fiscal, en no continuar de manera tozuda con la teoría del caso, teniendo en cuenta que los investigadores encargados de adelantar las pesquisas no trajeron o no colaboraron con nada en el sentido de demostrar la responsabilidad de los encartados en el injusto penal por el que fueron llevados a juicio, por consiguiente al no demostrasen los requisitos del artículo 381 del código penal, toda vez que no se demostró la responsabilidad de la droga incautada en la residencia para fines de venta por parte de los acusados, es decir, no se pudo demostrar que los encartados hayan cometido la conducta por la que fueron llevados a juicio.

- **QUINTO:** En la parte considerativa de este fallo se acentúa más la responsabilidad de los entes demandados, por cuanto se pudo constatar tanto por parte de la fiscalía en el juicio oral y del juez con los testimonios de cargo y de descargo que los señores encartados no cometieron la conducta punible por la que les fue proferida la medida de aseguramiento que los privó injustamente de su libertad, configurándose la denominada **CAUSAL OBJETIVA DE RESPONSABILIDAD**, que a su turno se traduce en privación injusta de la libertad, porque se estableció que **JANIER VILLOTA** no cometió el ilícito, es decir la privación de la libertad se tornó injusta por cuanto él es totalmente ajeno a la comisión del delito y además no se logró desvirtuar su presunción de inocencia lo que torna en doblemente injusta la privación de su libertad, por cuanto se le obligó a soportar un daño antijurídico que no estaba en la obligación jurídica de soportar y que irrogó unos perjuicios a su núcleo familiar conformado por sus padres y su menor hijo **TOMAS** quienes se vieron seriamente afectados a raíz de este daño antijurídico causado por la entidades convocadas.

- **SEXTO:** Mi poderdante estuvo injustamente detenido en la cárcel del circuito de Tuluá valle, por investigación adelantada bajo el radicado 768346000187-201402658, proceso adelantado por el Juzgado Tercero Penal del

Circuito de esta urbe, recobrando su libertad el día dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014), fecha en la cual se profirió la sentencia 103 del 02-12-2104, por medio de la cual lo absolvió de los cargos imputados.

IV. DEL TIEMPO DE DETENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS DEL PERJUICIO.

El señor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, estuvo privado de su libertad en la cárcel del circuito de Tuluá valle, por cuenta de las entidades demandadas desde el día doce (12) de julio hasta el primero (1) de diciembre de 2016, fecha en que el juzgado tercero penal del circuito de esta ciudad lo **ABSOLVIÒ** de los **injustos cargos formulados en su contra**, a petición de la Fiscalía General de la Nación y recobró su libertad inmediata.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Como consecuencia de la privación injusta de la libertad que hubo de padecer mi poderdante a raíz de las decisiones tomadas por las entidades demandadas se quebrantaron las siguientes disposiciones superiores y legales:

5.1. CONSTITUCIONALES

Artículos: preámbulo, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 28, 29, 42, 44, 90, 93.

ARTICULO 2 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

Con su actuar la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Cuarto penal municipal con funciones de garantías de Tuluá Valle, infringieron este precepto constitucional por cuanto, al ser las entidades públicas las encargadas de proteger la honra de los ciudadanos y de proporcionarlas condiciones más favorables a los seres humanos residentes en Colombia, para que sus derechos naturales y jurídicos sean respetados de manera indiscutible, no aseguró con su actuar que los deberes sociales del estado fueran tenidos en cuenta a favor de la convocante y su familia, sino por el contrario, fue mancillado su nombre, al privarla injustamente en su libertad, sin contar con las pruebas suficientes para derribar la presunción de inocencia que le asiste a todo ciudadano Colombiano.

ARTICULO 6 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.

"Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" (resaltado es mío).

Los entes convocados incurrieron en omisión y extralimitación de funciones, el Juezcuarto penal municipal con funciones e garantías de Tuluá valle, que profirió la medida de aseguramiento y la fiscalía que la solicitó, omitieron su función, al permitir mantenerlo privado de la libertad sin contar con las pruebas suficientes para desmoronar el principio constitucional de la presunción de inocencia, pero en todo caso si en gracia de discusión se admitiera que no hubo tal omisión o extralimitación, se deberá tener en cuenta que en estos casos donde se debate la responsabilidad del estado de manera **OBJETIVA** es irrelevante el estudio de la conducta del juez o funcionario que participó en la imposición de la

medida de aseguramiento, es decir, si hubo culpa o dolo al proferirla, porque no es la antijuridicidad de la conducta del agente del estado lo que se reprocha, sino la antijuridicidad del **DAÑO** sufrido por la víctima y en este caso es evidente que el tiempo de privación le irrogo unos perjuicios a mi cliente y su núcleo familiar.

ARTICULO 21 CONSTITUCIÓN POLITICA DECOLOMBIA.

"se garantiza el derecho a la honra. La ley señalara la forma de su protección"

Con el actuar irregular de las entidades convocadas, se ocasionó un **DAÑO ANTIJURIDICO** a la honra de mi poderdante, y su núcleo familiar, puesto que fue expuesto ante la sociedad capturado, sin tener sustento legal, ni constitucional para hacerlo y más cuando sobre mi poderdante recaía el principio universal de **LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y POR EL CONTRARIO SE LOGRÓ PROBAR QUE ERA UN ENFERMO DROGADICTO**, como se efectivizó en el fallo de la absolución. .Aun así mi procurado fue mancillado moralmente en su honra y estigmatizado por la sociedad y señalado como una delincuente, sin razón tener los suficientes elementos para fincar un fallo de condena en su contra.

ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA.

"toda persona es Libre. Nadie puede ser molestado en su persona y familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley"

Los entes convocados debieron de tener suma cautela al momento de proferir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de mi defendido, puesto que no indagaron cual era la causa real por la que ese encontraba recibiendo al suma de dinero por la cual fue puesto tras las rejas, fallo el ente fiscal al momento de desarrollar el programa metodológico que culminó con la captura de mi defendido.

La libertad es el don máspreciado para el ser humano después de la vida en un estado social de derecho como el nuestro, la constitución de 1991 le da prelación a estos dos derechos fundamentales por encima de cualquier otro, quedando la persecución punitiva del estado relegada a otros de menor importancia constitucional.

La consagración de la responsabilidad del estado por la afectación de la libertad de los ciudadanos, obliga a los jueces y fiscales a asumir con total responsabilidad y celo la evaluación de los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento o dictar una orden de captura, pues una decisión de esta talla exige altos contenidos éticos.

ARTICULO 29 CONSTITUCION POLITICA DECOLOMBIA

Ahora bien, con la privación de la libertad del demandante, la fiscalía de Tuluá valle y el juez cuarto penal municipal con funciones de garantía que impuso la medida, violaron todos los preceptos legales, ya que la fiscalía solicito una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y el juez de garantías la decreto, causándole un perjuicio antijurídico a mi defendido, el cual no estaba en condiciones jurídicas de soportar, se tomaron decisiones jurídicas basada en suposiciones, es decir, los supuestos elementos de prueba sobre la cual se basó la acusación no existía, pues se mantuvo incólume su presunción de inocencia y no fue posible desvirtuarla, tanto así que finalmente este proceso termina en **ABSOLUCION**.

5.2. INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 10.

5.3. LEGALES

Ley 270 de 1996

Artículos: 1, 23, 28, 65, 68.

Desde el propio preámbulo constitucional se busca asegurar a sus integrantes entre otros derechos el de la libertad. Si Colombia es un estado social de derecho fundado en la dignidad humana, someter a una persona como mi poderdante a una detención tan prolongada, bajo las condiciones en que se viven en un centro carcelario de este país, es elemental manifestar que esa actuación de la justicia atentó contra la dignidad humana del señor **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO** y de contera se vulneraron los derechos fundamentales de su familia.

Lógicamente que con la actuación judicial se vulneró el derecho fundamental de la libertad. y a pesar de la acuciosa investigación adelantada por la Fiscalía 2 local de Santander de Quilichao, la presunción de inocencia de mi prohijado se mantuvo incólume, pues fue la misma fiscalía quien solicito en sus alegatos de conclusión la **ABSOLUCION** de mi poderdante, es decir, se dio una causal **OBJETIVA** de responsabilidad al decretarse por parte del juez de conocimiento que la conducta era atípica.

Ahora bien, el artículo 90 de la Constitución incluyó una cláusula general de responsabilidad del Estado y ordena indemnizar los daños antijurídicos que causen las autoridades públicas, ya sea por acción u omisión. Se entiende por daño antijurídico aquel que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, los cuales rebasan las cargas que normalmente se deben padecer. Y estar durante superior a seis meses detenida injustamente es una carga que ningún ciudadano colombiano esté obligado a soportar, y menos cuando esa detención conlleva la vulneración de los derechos de otras personas, en este caso de su menor hijo sus padres, a lo que se debe agregar las consecuencias psicológicas y de toda índole que comporta la prisión y el proceso de reinserción a la vida social después de semejante estigmatización, ante familiares y amigos.

En cuanto a la detención de los reclusos en el país, el Consejo de Estado tiene establecido que es una responsabilidad objetiva, es decir, responsabilidad sin falla, lo que indica que no se requiere que el Estado haya incurrido en una falla de servicio para que vea comprometida su responsabilidad patrimonial, al actor le basta probar el hecho dañoso, el daño sufrido y el nexo causal entre uno y otro, en tanto la exoneración para el Estado quedará sujeta a la prueba de una causa externa, entendida esta como fuerza mayor o el hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, como bien lo explican los doctores **ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUE y CATALINA FRANCO GÓMEZ** en su libro Responsabilidad Extracontractual del Estado. Esta clase de responsabilidad se da por ejemplo en los daños sufridos por los reclusos, o los daños causados por armas de dotación oficial etc. y lógicamente que la privación injusta de la libertad por absolución es una forma de responsabilidad objetiva, concepto refrendado ampliamente por el Consejo de Estado en la sentencia 20713 del 22 de junio de 2011 con ponencia del doctor Enrique Gil Botero.

Recientemente el Consejo de Estado, sobre la detención injusta dijo:”(...) Alega la parte apelante que su actuación se ciñó a la normatividad y que por lo tanto no se puede configurar responsabilidad en su contra.

Al respecto, resulta oportuno advertir que la jurisprudencia de la Corporación no desconoce el deber constitucional que tiene la Fiscalía General de la Nación de investigar los hechos que revistan las características de un delito, así como de tomar las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal al proceso, sin embargo, tal como se expuso en el acápite anterior, dado el régimen de responsabilidad aplicable al caso, no es determinante establecer si la medida se adoptó en cumplimiento del deber constitucional señalado y con el lleno de los requisitos previstos para tal efecto, esto es, si fue legal, por cuanto en estos casos la responsabilidad se predica de lo antijurídico del daño padecido, mas no de la ilegalidad de la conducta desplegada por la entidad demandada y, como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, en los eventos en los que lo injusto de la privación de la libertad devenga de alguno de los supuestos previstos en el ya derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el daño siempre será antijurídico, porque la persona que debió padecerlo no estaba en el deber jurídico de soportarlo y, por lo tanto, deberá ser indemnizada.

Así las cosas, en este caso, las consideraciones expuestas por la parte apelante respecto de que actuó en cumplimiento de un deber constitucional y con apego a los requerimientos que para el efecto dispone la ley, no tienen la virtualidad de enervar la responsabilidad que se le imputa.

Se precisa igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues contradice los principios básicos consagrados en las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política.

Cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar (Negrillas y subrayado fuera de texto) (sentencia de abril 27 de 2011. Expediente. 25000-23-26-000-1998-01051-01 **(21140). MP.: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.**

De igualmente en sentencia 13168 del 4 de diciembre de 2006 el Consejo de Estado con ponencia del doctor **MAURICIO FAJARDO GÓMEZ** hace un recuento rápido acerca de la jurisprudencia del máximo Tribunal Contencioso Administrativo con relación a la detención injusta, cuando dijo:”(...) 3.-Responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, no ha sostenido un criterio uniforme. En efecto, la interpretación y aplicación del artículo 414 de Código de Procedimiento Penal Decreto ley 2700 de 1991, ya derogado pero aún aplicable a casos ocurridos durante su vigencia—, se ha desarrollado en tres distintas direcciones, como se sintetiza a continuación.

En una primera etapa, la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error

judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, (...)

Más tarde, en una segunda época, la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan sólo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados.

Por último, se ha venido sosteniendo el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.

La Sala, recientemente, al analizar los tres casos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal como hechos generadores de responsabilidad patrimonial del Estado, sostuvo:

“La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001

porque considera que en estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”.

4.- De la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la detención preventiva ordenada con el lleno de los requisitos legales, cuando posteriormente se exime de responsabilidad al sindicado.

Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella

es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

(...) Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general.

(...) No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad como en el presente caso durante veintidós días y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial o preclusión definitiva de la investigación ordenando archivo del expediente. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar cuarenta y tres días en prisión y que sea posible aducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de Administración de Justicia del Estado.

(...) Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo.

(...) Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”. (Negritas y subrayado fuera de texto).

De igual manera en sentencia del 8 de octubre de 2007, expediente 16.057, con ponencia del doctor **MAURICIO FAJARDO GÓMEZ**, el Consejo de Estado, refirma una vez la responsabilidad objetiva con relación a la privación injusta de la libertad, al respecto manifestó: “Resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigir a un particular que soporte inerte y sin derecho a ninguna compensación (como si fuera una carga pública que todos debemos asumir en condiciones de igualdad), el verse privado de uno de los bienes jurídicos más preciados quizá el segundo en importancia después de la vida, como es la libertad personal, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si una vez desplegada su actividad, esta rama del poder público a la cual le corresponde la

carga de la prueba no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba”.

De otro lado el Consejo en sentencia del 7 de octubre de 2009, radicación número 75001-23-31-000-1998-01360-01(17117), con ponencia de la doctora Myriam Guerrero de Escobar, dijo: “(...) Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, y si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa igualmente que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

(...)Así las cosas, cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, entre otros, la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar”.

El tema de la privación injusta de la libertad es tratado por el Consejo de Estado en sentencias del 26 de marzo de 2008, radicado 16902; del 17 de junio de 2008, radicado 16388; del 25 de febrero de 2009; del 27 de octubre de 2005, radicado 15367 etc.

El artículo 65 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, retomando lo establecido en el artículo 90 de la Constitución en el sentido que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. Y en inciso segundo señala que el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Por su parte el artículo 68 ibídem establece lo atinente a la privación injusta de la libertad.

De otro lado, La Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humano, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana, consagró el artículo 10: “Derecho a indemnización. **Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia en firme por error judicial**”.

De algunas pruebas documentales arrojadas a esta demanda, se puede inferir sin mayor dificultad de los profundos sufrimientos y vicisitudes por los que tuvo que pasar mi poderdante **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**. Debido a la privación injusta de que fue objeto por parte de las entidades demandadas.

VI. PRUEBAS

Para que se tengan como pruebas dentro de este proceso, respetuosamente me permito solicitarle al señor juez decreten y practiquen las siguientes:

6.1. DOCUMENTALES

6.1.1. Poderes para actuar suscritos por: **JANIER ADRIAN VILLOTA PALACIO**, **JOSE ALONSO VILLOTA SERNA**, y **BLANCA MARLIRIA PALACIO BOLIVAR**.

6.1.2. .- Copia auténtica del proceso radicado **2014-02658-00** adelantado por el juzgado tercero penal del circuito de Tuluá valle, en 26 folios, más tres **CD** que contienen audiencias preliminares, acusación y juicio oral.

6.1.3. Copia de los registros civiles de nacimiento de los demandantes.

6.1.4. Constancia de la cárcel sobre el tiempo que estuvieron detenidos los demandantes. .

6.1.5. Certificación expedida por el procurador de no conciliación

VII. CUANTÍA Y COMPETENCIA

Es usted competente señor juez administrativo conforme a la cuantía expuesta en el acápite de las pretensiones, además por la naturaleza del asunto y domicilio de las partes, el carácter de la petición, el lugar de los hechos y conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES

Esta demanda se fundamenta en lo establecido en los artículos 86, 132 numeral 6, 136 a 139, 206 y siguientes del C.C.A.; y, en las disposiciones citadas en el acápite de las normas violadas y concepto de la violación.

IX. ANEXOS

Los enunciados en el acápite de pruebas documentales. Además allego, Copia de la demanda con los anexos para la Fiscalía, Rama Judicial, Ministerio Público y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y copia simple para el archivo del despacho, **CD** que contiene la demanda.

X. NOTIFICACIONES

LAS ENTIDADES DEMANDADAS:

1-Al señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, en la ciudad de Cali, en la dirección seccional en la carrera 10 No 12-15, **palacio de justicia Cali**, correo electrónico: **desajdinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co**.

2-Al señor Fiscal General de la Nación **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ** o quien haga sus veces diagonal **22B #52-01 BUNKER** en Bogotá, o su representante en la ciudad de Cali Dirección Seccional de Fiscalías.

3-La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recibirá notificaciones personales en la calle 70 No. 4-60 DE Santa Fe de Bogotá D. C. correo buzonjudicial@defensajuridica.gov.co.

4- La parte actora y los poderdantes, recibiremos notificaciones a través del suscrito, en la secretaria del despacho o en mi oficina particular ubicada en la carrera 19 B calle 15 A 5 Trujillo valle, teléfono 300-781-41-42, correo jozorlandobetancourt1@gmail.com.

Cordialmente,



JOSE ORLANDO BETANCOURT GARZON

C. C. No 6.513.298 de Trujillo valle.

t. p. N° 124357 del C. S. de la J